1022-1

COLUMNAS



Droga

JORGE ARRATE

La droga amenaza a Chile y los chilenos. Se dice que avanza, como una mancha creciente, de norte a sur. El éxito de programas de prevención en grandes centros consumidores como los Estados Unidos ha derivado la oferta hacia otros países, entre ellos el nuestro. Los traficantes, al mismo tiempo, abaratan el producto para ampliar su mercado a los más

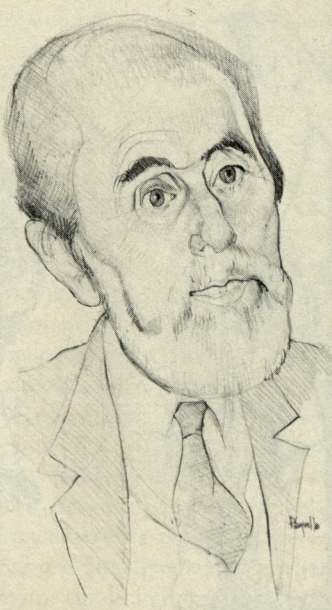
El derecho a defender lo que tanto nos costó conquistar

ANDRES AYLWIN

Aquellos que cuando desaparecían cen tenares de personas, guardaron dramático silencio; aquellos que cuando se torturaba a seres humanos indefensos, callaron prudentemente; aquellos que cuando la crueldad reinaba en nuestra patria, asumieron importantes funciones desde donde saltaron posteriormente a cargos parlamentarios; aquellos que cuando una larga mordaza atrapó la conciencia moral de la patria, disfrutaron a su antojo de las pantallas televisivas; si, aquellos que ayer fueron incapaces de dedicar cinco minutos al ser humano seguido y después torturado y ultrajado, hoy pretenden que Chile entero, y entre ellos la Cámara de Diputados, dedique dias y noches a investigar un proyecto de seguimiento de personas sobre el cual no existen antecedentes concretos de ejecución y que, en todo caso, el Gobierno democrático dejó sin efecto minutos después de conocerlo.

Es cierto, estamos en democracia, y ellos tienen derecho a hacer las denuncias que deseen. Pero otros, también, estamos en nuestro derecho al señalar, especialmente tratándose de los dirigentes de la UDI, su inconsecuencia y su oportunismo. No aceptaremos jamás que existan tiempos para callar frente a los peores asesinatos y tiempos para levantar voces histéricas frente a las conductas hipotéticas y que, en ningún caso, constituirían atentados contra la vida o la integridad de personas.

Por otra parte, esas grandes inconsecuencias referidas al ayer, se proyectan también a los hechos concretos de hoy. Y así, por ejemplo, los que ponen tanto énfasis y calor en denunciar los Halcones I y II (sin pruebas de haber sido ejecutados), sin embargo, restan importancia a los seguimientos hechos por la DINE a la esposa del general Stange o a dirigentes del Partido Socialista. Tampoco les preocupa en absoluto el llamado «ejercicio de enlace» que, según muchos antecedentes, implicó incluso interferencias radiales y control por vehículos militares a los cuarteles de Investigaciones.



Nótese que éstos son «hechos concretos» y no «proyectos».

Debemos preguntarnos ¿qué se pretende con tanto escándalo, hábilmente amplificado?

Creemos, al efecto, que existe un primer hecho revelador. El mismo documento recibido por el DINE en enero del presente año fue hecho público por la UDI tres meses después, precisamente cuando se hizo evidente la realización de elecciones municipales. Curiosamente, en ese momento todas las encuestan asignaban a la UDI un ínfimo apoyo porpular del siete por ciento.

Sin embargo, creemos que detrás de esta denuncia (y su escándalo publicitario) existe un propósito mucho más grave y sobre el cual deben reflexionar los sectores de Renovación Nacional realmente comprometidos con la libertad, especialmente los sectores jóvenes. Pensamos que se pretende que nuestra Democracia naciente, la misma que conquistamos con tanto dolor y sacrificios, carezca absolutamente de «servicios de inteligencia» capaces de defenderla eficientemente y prcaverla contra cualquier intento de desestabilización.

Estos propósitos delesnables han quedado claramente ratificados cuando parlamentarios de la UDI han señalado que los Servicios de Investigaciones carecen de atribuciones en materias de «inteligencia». A esta tesis absurda ha adherido también el general Pinochet (siempre juntos) y todo indica que existe una campaña perfectamente orquestada tendiente a hacer desaparecer una policía civil comprometida en la defensa de la institucionalidad democrática.

Frente a esta realidad debemos afirmar con coraje el derecho y la obligación de la democracia a defenderse, contando con servicios de inteligencia eficientes, dependientes del poder civil y que actúen con pleno respeto a los derechos humanos. La experiencia vivida el 11 de septiembre de 1973 y en los años posteriores constituyen una dura lección que no podemos ni debemos olvidar.